

Señores:

JUZGADO NOVENO (9º) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI, (VALLE)

E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: **REPARACIÓN DIRECTA.**
RADICADO: **76001-33-33-009-2021-00193-00.**
DEMANDANTE: **HERROTA & ASOCIADOS S.A.S.**
DEMANDADO: **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y OTRA.**
LLAMADO EN GARANTÍA: **ASEGURADORA SOLIDARIA Y OTROS.**

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, (V), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá, D.C., abogado en ejercicio portador de la T. P. No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado general de la **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, sociedad aseguradora, sometida a control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio principal en la Calle 33 # 6 B – 24 de la ciudad de Bogotá, D.C., identificada con el NIT. 860.037.013 – 6, representada legalmente por el doctor José Camilo Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.102.988, conforme se acredita con certificado de existencia y representación legal adjunto. Encontrándome dentro del término legal, comedidamente procedo, en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA** impetrada por HERROTA & ASOCIADOS S.A.S., en contra del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, Y OTRA, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tenga en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

OPORTUNIDAD PARA CONTESTAR LA DEMANDA.

El 10 de mayo de 2023, el Juzgado Noveno (9º) Administrativo Oral del Circuito de Cali, notificó en estados el Auto Interlocutorio No. 375 del 9 de mayo de la anualidad, por medio del cual admitió la REFORMA DE LA DEMANDA Y LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍAS, concediéndole el término de quince (15) días a los demandados y llamados para contestar la misma.

El Despacho notificó electrónicamente a mí representada **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, el día 10 de mayo de 2023.

El término de traslado de quince (15) días para contestar se surtiría desde los días 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de mayo de 2023, y **1º** de junio de 2023, por lo que se concluye que este escrito es presentado dentro del término previsto para tal efecto.

CAPÍTULO I

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Frente al hecho PRIMERO: no me consta el objeto social de la empresa, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la Aseguradora. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello, en especial con el certificado de existencia y representación legal. No me consta que, hasta el 23 de febrero de 2018, la parte demandante prestara sus servicios de forma normal conforme a la Resolución No. 1220 de 2010, por escapar al conocimiento de mi procurada.

Frente al hecho SEGUNDO: es cierto, conforme la documental anexa al dossier se observa que la demandante radicó solicitudes de cobro a la aseguradora que represento.

Frente al hecho TERCERO: es cierto, la aseguradora devolvió los documentos por cuanto la empresa demandante no cumplía con los requisitos exigidos para el pago de transporte conforme a las normas que regulan la materia.

Frente al hecho CUARTO: es cierto, la aseguradora para el pago de los servicios le solicitó a la empresa los códigos de asignación del servicio, requiriendo a la demandante para que aportara los mismos para proceder con el pago, es decir nunca se negó el pago, se condicionó hasta que se aporte la documentación completa.

Frente al hecho QUINTO: no es cierto, el Decreto No. 4112.010.20.0074, se encuentra ajustado a lo dispuesto en la Resolución No. 1220 de 2010 y en la Resolución No. 00926 de 2017, el citado acto administrativo únicamente implementa lo consignado en las respectivas resoluciones, razón por la cual el alcalde no se extralimitó en sus funciones como tampoco vulneró la Constitución Política ni la Ley 489 de 1998.

Lo aquí expuesto, corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, en adelante Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o C.P.A.C.A.

Frente al hecho SEXTO: no me constan directa ni indirectamente las circunstancias narradas en este hecho, al ser totalmente ajeno a mi representada, el supuesto perjuicio causado a los propietarios de ambulancias que prestan servicios en la ciudad de Cali.

No es cierto, que el Decreto implementara obligaciones que no se encontraban establecidas por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social, la Resolución No. 000926 de 2017, contempla lo consignado en el Decreto No. 4112.010.20.0074 del 23 de febrero de 2018, luego, es evidente que no se trata de una imposición del ente territorial.

Lo aquí expuesto, corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del art. 211 de la Ley 1437 de 2011, en adelante Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o C.P.A.C.A.

Frente al hecho SÉPTIMO: no me consta directa ni indirectamente que la sociedad demandante haya dejado de percibir la suma de ciento treinta y cuatro millones novecientos noventa y cinco mil doscientos pesos, (**\$134.995.200**, conforme a la reforma), como contraprestación de los servicios prestados a los pacientes de SOAT.

Yerra en manifestar el apoderado de la parte actora un supuesto daño y perjuicio aduciendo que el mencionado acto administrativo impone una carga que no puede soportar la demandante. Esto solo hace parte de una conjetura, pues objetivamente no demuestra cómo lo afectó y en qué medida.

Lo aquí expuesto, corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

Frente al hecho OCTAVO: no es un hecho, se trata de conjeturas efectuadas por el apoderado del extremo activo.

Sin embargo, debe manifestarse que en el párrafo 2º del artículo 14 de la Resolución No. 926 de 2017, se consignó lo siguiente:

“Artículo 14. Coordinación y gestión de/as solicitudes. Será responsabilidad de los CRUE coordinar y gestionar la respuesta en salud requerida, según el caso, para la atención de las situaciones de urgencia, emergencia o desastre reportadas por la comunidad o por las autoridades.

Parágrafo 2. El -CRUE asignará un código de registro al servicio de atención prehospitalaria o de transporte asistencial designado para realizar la atención. El registro, además de un número consecutivo, deberá incluir la identificación del paciente, la hora de recepción y despacho, la identificación del vehículo despachado, la hora de llegada a la escena, el lugar donde se solicitó trasladar el paciente y la hora de recepción por parte de la institución hospitalaria. Para tal efecto el prestador deberá proporcionar la información en forma inmediata al terminar el servicio”. (Énfasis propio).

En la misma línea, el párrafo del artículo 15 ibidem, reza lo siguiente:

“Parágrafo. Todas las ambulancias y vehículos de atención pre hospitalaria deberán responder a las situaciones de urgencia, emergencia o desastre, conforme con las directrices que emita el -CRUE”.

Luego es evidente que el ordenamiento jurídico establece la asignación de un código para el registro del servicio, quedando plenamente demostrado que no es una exigencia de la entidad territorial. Aunado a lo anterior, no se observa cual es el perjuicio causado a la empresa propietaria de ambulancias con la implementación del requisito que trae la Resolución No. 926 de 2017.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones deprecadas por el apoderado judicial de la parte actora, en tanto no ha logrado demostrar la responsabilidad de la entidad territorial al expedir el Decreto No. 4112.010.20.0074 del 23 de febrero de 2018, pues el mismo se fundamenta en las normas que rigen su expedición, se profirió por la autoridad competente, debidamente motivado, sin transgresión de derecho subjetivo alguno y con total observancia de las disposiciones de la materia.

Para lograr mayor precisión frente a los requerimientos de la demanda, a los cuales me opongo, me refiero a cada pretensión así:

Oposición frente a la pretensión PRIMERA: respetuosamente solicito al Despacho no declarar administrativamente responsable al extremo pasivo por cuanto el citado Decreto No. 0509 de 2016, fue expido con sujeción al ordenamiento jurídico, al haber sido emitido por el funcionario competente, de forma regular, con la respectiva motivación, suministrando información clara, oportuna y citando las normas aplicables a la materia, sin que se pueda advertir el daño ocasionado a la demandante con su expedición. Máxime cuando HERROTA & ASOCIADOS S.A.S., no demandan la nulidad del acto administrativo.

Oposición frente a la pretensión SEGUNDA: me opongo a la vinculación de mi representada por cuanto la misma no tiene injerencia alguna en la expedición de la normatividad que regula el transporte de pacientes del SOAT.

Oposición frente a la pretensión TERCERA: me opongo rotundamente a la prosperidad de dicha pretensión por cuanto no existe daño alguno que se generara por la expedición del decreto, razón por la cual no se puede acceder al reconocimiento del pago ciento treinta y cuatro millones novecientos noventa y cinco mil doscientos pesos, **(\$134.995.200, conforme a la reforma de la demanda)**, por los supuestos perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, por el no pago de los servicios de ambulancia en el territorio del municipio, máxime cuando el decreto se expidió con estricta sujeción al ordenamiento jurídico y por el funcionario competente. Máxime cuando la parte actora no impetró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

1. FALTA DE JURISDICCIÓN:

En el libelo demandatorio se sostiene que existe una controversia entre la empresa demandante y la compañía Mundial de Seguros S.A., por el no pago de servicios prestados con ocasión del SOAT, debido a la expedición del Decreto No. 4112.010.20.0074 del 23 de febrero de 2018, el cual exige el código de atención del servicio. Dicha controversia debe ser ventilada ante la Superintendencia Financiera de Colombia y no en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, toda vez que con la demanda no se busca la nulidad del acto administrativo que se indica está generando el daño a la demandante.

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia, en respuesta dada al Congreso de la República, frente a la competencia de las controversias por el no pago de servicios de transportes por SOAT, sostuvo lo siguiente:

Ahora, una vez superados los temas de la pertinencia médica o valores facturados a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud o el Ministerio de Salud según corresponda, la Superintendencia Financiera de Colombia conoce de aquellas reclamaciones presentadas por las Instituciones de Servicios de Salud -ISS en contra de las Compañías Aseguradoras en los casos de mora en el pago o las objeciones para su reconocimiento por ausencia de alguno de los documentos exigidos en el artículo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016.

De otra parte, la Superintendencia Financiera conoce las quejas en las que la norma establece como beneficiarios para reclamar las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito-SOAT, correspondientes a gastos de transporte, incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios, bien sea por su no reconocimiento o mora en el pago.

Para las inconformidades radicadas ante la SFC son trasladadas a la Compañía Aseguradora para su conocimiento y explicaciones, con la instrucción de atenderla de acuerdo con los parámetros definidos en la Circular Básica Jurídica expedida por este Organismo con la finalidad que la respuesta que suministre al Consumidor Financiero sea clara, comprensible, pertinente, completa y sustentadas con los documentos que sean necesarios. (Circular Externa 029 de 2014)

Conforme a la anterior cita, es claro que la demandante HERROTA & ASOCIADOS S.A.S., al ser requerido por mi procurada para presentar el código de asignación del servicio, debió interponer una reconsideración, y de no obtener el pago, acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia para que esta dirimiera la controversia suscitada, situación que no se cumple en el caso estudiado, pues de forma equivocada se pretende la reparación directa de una relación contractual.

Aunado a lo anterior, con las facturas que tiene la empresa demandante debió acudir a la jurisdicción ordinaria e impetrar el proceso correspondiente para el cobro de los servicios prestados, siendo esta la vía judicial procesal, pues las facturas prestaban mérito ejecutivo. Sin embargo, se acude de forma errada a la jurisdicción contenciosa administrativa pretendiendo por el medio de control de reparación directa el resarcimiento de unos supuestos perjuicios.

2. EL DECRETO No. 4112.010.20.0074 DEL 23 DE FEBRERO DE 2018, EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SE PRESUME LEGAL HASTA TANTO NO SE DECLARE NULO POR UN JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

El artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reza: *“los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar”*.

“Como es bien sabido, la presunción de legalidad, legitimidad, validez, ejecutividad o de “justicia” de que están dotados los actos administrativos y que le da plena eficacia y obligatoriedad a esta manifestación de la actividad de la Administración, supone que todo acto administrativo está conforme al ordenamiento jurídico superior¹”.

En este sentido, el acto administrativo del cual se predica está generando daño a la empresa

¹ Consejo de Estado – Sección Tercera Sentencia 03 de diciembre de 2007. C.P. Ruth Stella Correa Palacios.

demandada, se encuentra protegido bajo la presunción de legalidad establecida en el citado artículo, reputándose legales los efectos que se generaron en virtud del mismo, puesto que la parte demandante no logra desvirtuar dicha presunción, por lo que el Decreto goza de total validez.

La presunción es la consideración o la imaginación de creer cierto un acto administrativo y que el mismo ha sido creado acorde con las normas jurídicas existentes que regulan su expedición, tanto en el plano material como formal. Razón tiene el tratadista Berrocal, cuando enuncia su definición así:

“Consiste en considerar o dar como cierto que todo acto administrativo ha sido expedido de acuerdo con el ordenamiento jurídico, conforme a las reglas para su creación, tanto desde el punto de vista material, es decir, en relación con su contenido, como desde el punto de vista formal, esto es, en lo concerniente a sus 57 elementos, la competencia, requisitos, trámites, oportunidad y demás aspectos adjetivos para su expedición de cada caso²”.

El acto administrativo tiene una causa, esta se refiere a la situación fáctica o jurídica y la valoración jurídica-normativa que sirve de soporte para su emisión. Es el modo de expresión de la voluntad del acto administrativo que envuelve la finalidad del interés público. El Acto Administrativo se origina en aquello que lo motiva y el análisis fáctico, jurídico y normativo hecho por la administración en sus diversos órdenes jerárquicos y de competencia, para concebir un acto administrativo específico, en una materia determinada, siendo así diversa la causa o motivo puede ser diversa que le da nacimiento y puede ser en cualquier aspecto relevante en el área de actividad de la administración. Los motivos o causa son los que originan en sí el acto administrativo, el aporte fáctico y jurídico del sentido y alcance de la declaración o contenido del acto administrativo, para hacer necesaria su expedición. La forma es la manera como finalmente se elabora el acto administrativo, acorde con la materia y el fin que persigue y fija diferencias entre acto y acto por su naturaleza, y deben cumplir con etapas y formalidades para su realización. Todo Acto Administrativo tiene una finalidad o propósito desde su creación y ese es su fin. Necesita de una manifestación volitiva de quien lo emite, revestido de sus facultades de servidor estatal. Los requisitos de validez del acto son las condiciones para ajustarlo al ordenamiento jurídico, es válido si concurren a su formación sus elementos esenciales, debe ser emitido por funcionario competente, es decir investido de las facultades que en el desempeño de su cargo le están permitidas.

Ahora bien, de conformidad con la actuación desplegada por el ente territorial es dable insistir en la legalidad del acto administrativo demandado pues el mismo se expidió con sujeción al debido proceso y teniendo en cuenta las Resoluciones No. 1200 de 2010 y la No. 000926 de 2017, las cuales determinan las directrices del Ministerio de Salud y de la Protección Social respecto de la organización, operación y funcionamiento del centro regulador de urgencias, emergencias y desastre.

² BERROCAL GUERRERO Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Librería Ediciones del Profesional, Bogotá, abril de 2.009. pág. 213.

Bajo este entendido, es claro que el decreto del cual se reputa el daño causado a la empresa demandante goza de legalidad, pues el mismo se expidió por el funcionario competente, de forma regular, el decreto está debidamente motivado y no se abusó de las funciones.

En virtud de lo expuesto, ruego al señor juez reconocer dicha excepción.

3. COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL QUE PROFIRIÓ EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CUAL SE PREDICA EL DAÑO GENERADO A LA EMPRESA HERROTAS & ASOCIADOS S.A.S.

Teniendo en cuenta que los actos administrativos deben ser emitidos por los órganos y los funcionarios competentes de acuerdo con la atribución constitucional, legal o reglamentaria, se configura el principio de legalidad. Dicho principio preceptúa en que solo los funcionarios públicos están autorizados para realizar actividades expresamente establecidas en el ordenamiento. El Consejo de Estado al respecto ha determinado: *“La noción de competencia es, por tanto, la base de todo derecho público, y en virtud de ella ningún organismo público puede ejercer su actividad fuera del cuadro de la competencia jurídica que le haya sido otorgada”*³.

Ahora bien, todo acto administrativo que sea emitido desconociendo los hechos generadores de competencia, material, espacial y temporal, es necesariamente ilegal. Sobre los últimos tres factores, el Consejo de Estado reiteró:

“La competencia se encuentra determinada básicamente por tres elementos que no son taxativos ni excluyentes entre sí: material, temporal y territorial, cuya vulneración vicia de nulidad el acto, esto es, sobre las potestades asignadas por el ordenamiento jurídico a la administración y, puede darse por ejercicio de potestades de las que carece y que están en cabeza de otro, por ejercicio de competencias inexistentes, o por exceso en el ejercicio de las potestades asignadas. Por su parte, la incompetencia en razón de la temporalidad, hace referencia a los casos en que las competencias asignadas a un órgano o funcionario de la administración, deben ser ejercidas bajo condiciones de tiempo y, puede ocurrir que las potestades se ejerzan antes o con posterioridad al momento en que la administración podía actuar válidamente. Y la competencia en razón del territorio se presenta cuando las competencias se ejercen por fuera del ámbito territorial asignado al organismo o funcionario de la administración”⁴.

En el caso de marras, no se ha desconocido los tres (3) factores: material, espacial y temporal. Sobre el primero, se resalta que la materia y objeto del Decreto No. 4112.010.20.0074 del 23 de febrero de 2018, puede ser regulada por el Distrito Especial de Santiago de Cali, teniendo en cuenta que el Ministerio de Protección Social es una entidad centralizada de orden nacional que integra la rama ejecutiva del poder, y tiene en su directorio, entidades territoriales como las secretarías de salud y las alcaldías. En la ciudad de Cali, las entidades encargadas de regular los temas de salud son la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali y la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Aunado a lo anterior, la competencia está dada por la siguiente normatividad:

³ Consejo de Estado. Expediente No. 5497.

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación No. 11001-03-26-000-2000-00142-01 (19142).

“Resolución No. 1220 de 2010:

Artículo 3°. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CRUE. (...)

- a. Garantía Territorial: Corresponde a las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud garantizar de manera directa o a través de convenios o contratos, la organización de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE, **la cual deberá realizarse mediante acto administrativo expedido por la respectiva entidad territorial.** (Énfasis propio).

Decreto No. 780 de 2016:

Artículo 2.5.3.2.17 Organización y operación de los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas, las administradoras de riesgos laborales, las entidades que administran regímenes de salud especiales y de excepción y a los prestadores de servicios de salud, corresponde **a las direcciones territoriales de salud**, regular los servicios de urgencias de la población de su territorio y **coordinar la atención en salud de la población afectada por emergencias o desastres en su área de influencia.** El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá las condiciones y requisitos para la organización, operación y funcionamiento de los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres, - CRUE”. (Negrita fuera del texto original).

Resolución No. 926 de 2017:

Artículo 9. Coordinación no asistencia. (...)

Parágrafo. Las entidades territoriales **emitirán los actos administrativos respectivos para la implementación del SEM en su jurisdicción** y en general para el cumplimiento de las funciones aquí señaladas”. (Énfasis propio).

En atención a lo anterior, se debe precisar el término entidad territorial. La respuesta se encuentra en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998: ***“Integración de la Administración Pública. (...) Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de la Administración en el correspondiente nivel territorial (...).”*** (Subrayado propio).

El segundo factor proviene del latinajo “*Ratione loci*”, y alude al territorio de emisión del acto administrativo. Se cumple este factor en la medida que el Decreto No. 4112.010.20.0074 del 23 de febrero de 2018, fue expedido por la Alcaldía de Santiago de Cali, para que surtiera efecto en la ciudad de Cali. Entonces, en ningún momento se impuso dicha norma a un municipio, distrito, o entidad territorial distinta.

El último factor corresponde al temporal, es decir, a la época de expedición del mismo. El citado decreto fue expedido por el alcalde Maurice Armitage Cadavid, el día 23 de febrero de 2018, y

publicado en el Boletín Oficial No. 031 del **26 de febrero de la misma anualidad**, es decir, mientras su investidura como alcalde estaba vigente, pues esta feneció **el día 31 de diciembre de 2019**. Así mismo, el ejercicio de la expedición de esta norma no estaba otorgado a un órgano colegiado. Entonces, no es posible afirmar una investidura irregular o inclusive que el funcionario haya tenido una investidura de hecho.

4. EL CÓDIGO ÚNICO DE TRASLADO NO ES UNA INVENCION DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ESTÁ REGULADO EN LA RESOLUCIÓN No. 000926 de 2017.

El acto administrativo del cual se predica el daño generado a la empresa demandante tiene como fundamento jurídico la Resolución No. 1220 de 2010, la Resolución No. 000926 de 2017, la Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011, Ley 1523 de 2012, Ley 1751 de 2015, Decreto 2434 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 609 de 2016. Además, en la parte considerativa del decreto se tuvieron en consideración todas las directrices del Ministerio de Salud y de Protección Social en la materia.

Es de advertir al Despacho, que el número o código de registro del servicio constituye una exigencia a la luz **del parágrafo 2° del artículo 14 de la Resolución No. 000926 de 2017**, en los siguientes términos

“Artículo 14. Coordinación y gestión de/as solicitudes. Será responsabilidad de los CRUE coordinar y gestionar la respuesta en salud requerida, según el caso, para la atención de las situaciones de urgencia, emergencia o desastre reportadas por la comunidad o por las autoridades.

Parágrafo 1. Los pacientes atendidos por el -SEM deberán ser trasladados a la institución apropiada y con la oportunidad requerida según las condiciones de salud de la persona, acorde con el direccionamiento del -CRUE.

Parágrafo 2. **El -CRUE asignará un código de registro al servicio de atención prehospitalaria o de transporte asistencial designado para realizar la atención.** El registro, además de un número consecutivo, deberá incluir la identificación del paciente, la hora de recepción y despacho, la identificación del vehículo despachado, la hora de llegada a la escena, el lugar donde se solicitó trasladar el paciente y la hora de recepción por parte de la institución hospitalaria. Para tal efecto el prestador deberá proporcionar la información en forma inmediata al terminar el servicio”.

Se rememora de lo anterior, que el requisito del código lo establece la Resolución No. 00926 de 2017, con el objeto de llevar un control sobre el servicio de atención prehospitalaria o de transporte asistencial designado para realizar la atención, el cual es generado por el CRUE una vez el prestador proporcione la información pertinente al terminar el servicio, y no el Distrito Especial de Santiago de Cali como se afirma en el libelo introductorio.

Por lo antes expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción, como quiera que se ha demostrado que el acto administrativo no se encuentre cimentado en las normas que debía fundarse, bajo la idea que el fundamento de hecho y derecho del acto administrativo

respondió a la necesidad de implementar la organización, operación y funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE en el Municipio de Santiago de Cali.

5. IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO POR INDEBIDA ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE.

Esta excepción enerva las pretensiones en cuanto ella se erigió con una indebida tasación de los perjuicios reclamados en el medio de control, pretendiendo valores exagerados, desbordando los límites establecidos en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que dispone que el resarcimiento no puede ser inferior al daño, pero tampoco puede ser superior al mismo, como se pretende con el presente medio de control.

El lucro cesante se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica, de contenido pecuniario, es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir, que no ingresará al patrimonio de la persona.

Respecto al perjuicio material en la modalidad de lucro cesante en la suma ciento treinta y cuatro millones novecientos noventa y cinco mil doscientos pesos, **(\$134.995.200, conforme a la reforma de la demanda)**, el mismo no está llamado a prosperar por cuanto el decreto del cual se predica se ocasionaron los perjuicios se expidió con fundamento en el ordenamiento jurídico que rige la materia y por el funcionario competente, máxime cuando no se ha declarado la nulidad del mismo.

En conclusión, al no haberse aportado prueba si quiera sumaria que permita acreditar la ganancia dejada de percibir como consecuencia del hecho dañoso, no resulta procedente la pretensión impetrada en el líbello genitor, según la cual, debe reconocer y pagarse en favor de la parte actora suma de dinero por concepto de lucro cesante.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción pues desconoce la esencia de la institución de la indemnización.

6. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

Es imposible imponer una condena y ordenar indemnización por perjuicios no demostrados o presuntos, o si se carece de la comprobación de su magnitud y realización, ya que no es admisible la presunción en esa materia, de manera que una indemnización sin fundamentos fácticos ni jurídicos necesariamente se traducirá en un lucro indebido, como sucedería en un caso como el presente.

Por lo anterior, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

7. GENÉRICA O INNOMINADA.

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y prescripción.

Por todo lo anterior, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

CAPÍTULO II
MEDIOS DE PRUEBA

DOCUMENTALES QUE SE APORTAN:

1. Poder general conferido al suscrito por la **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
2. Certificado de Existencia y Representación de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, expedido por la Cámara de Comercio de Cali.

Respetuosamente solicito se decreten las siguientes:

1. INTERROGATORIO DE PARTE:

Ruego a su Despacho se Decrete el interrogatorio de parte del **Representante Legal** de la sociedad **HERROTA & ASOCIADOS S.A.S.**, de un cuestionario escrito que remitiré al Despacho antes de la fecha fijada para esta diligencia o de las preguntas que verbalmente le formularé durante la misma sobre los hechos narrados en la demanda.

CAPÍTULO III
NOTIFICACIONES

El suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35 N - 100, Oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape de la ciudad de Cali, (V), o en la dirección de correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Del señor Juez,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA.

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá, D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.